

Las políticas neoliberales y los nuevos movimientos e identidades sociales en México*

Humberto González

Las organizaciones y corporaciones transnacionales y los Estados nacionales no son los únicos -ni en ocasiones los más importantes- actores sociales que promueven y definen el proceso de globalización. Este -un proceso histórico que tiene existencia en las interacciones sociales- se presenta también como consecuencia de las iniciativas de un gran número de individuos y de grupos sociales entrelazados por sistemas de comunicación y de intercambio de bienes materiales y simbólicos, así como por redes de relaciones sociales que se extienden a lo largo del planeta (Appadurai 1990, Roberston 1992, Hannerz 1992, Mato 1994).

En este artículo analizaré un movimiento social que surgió en respuesta a una política de globalización formulada con base en un paradigma del desarrollo: el neoliberalismo. Este paradigma ha cobrado importancia desde mediados de los años setenta, conforme un número creciente élites de gobernantes de América Latina y de otros lugares del mundo lo han adoptado para definir las políticas económicas que permitirían a sus países enfrentar los retos del proceso de globalización (García 1992, Child 1992, Sarmiento 1992, Llach 1987, Hammer y Knudsen 1990, Velazco 1989, Modiano 1989, Meller 1989 y Flaño 1987).

* Deseo agradecer los comentarios de Margarita Calleja y de Daniel Mato a una versión preliminar de este trabajo. Durante la investigación recibí apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.

El movimiento social que analiza en este trabajo se desarrolló en México, cuando surgió una red de organizaciones locales articuladas entre sí que cuestionó y disputó al Estado la representación del interés nacional en el proceso de globalización. Entre sus miembros había la conciencia de vivir en un mundo interconectado e interdependiente en el que se estaba jugando su presente y su futuro y en el que debían de actuar concertadamente en los escenarios local, nacional e internacional. Esta situación se presentó en México como consecuencia de las profundas reformas económicas y políticas instauradas en las últimas tres administraciones federales, las cuales pretendían “modernizar” al país.

Este movimiento social, si bien no ha gozado de la misma difusión nacional e internacional que la movilización armada de los indígenas de Chiapas, ha abarcado a sectores más amplios de la población mexicana y ha tenido repercusiones más directas sobre el sistema político mexicano. Este movimiento ha promovido una amplia organización y movilización ciudadana en el campo y en la ciudad que: ha suplantado o ha redefinido el papel de las organizaciones políticas y corporativas a nivel local y regional; ha tenido incidencia en los comicios locales y estatales en varios estados de la república en los que triunfaron candidatos de los partidos de oposición al Estado; ha anulado o frenado la aplicación de políticas económicas que afectan a sus agremiados; por último, ha cuestionado la independencia e imparcialidad del poder judicial y ha limitado su ejercicio en los niveles locales.

El movimiento social al que me referiré fue emprendido por los deudores de la banca que no pudieron pagar sus adeudos en los tiempos convenidos y enfrentaron órdenes de embargos de sus propiedades (tierras agrícolas, maquinaria e instalaciones agrícolas, industrias y de servicios, casas habitación, etcétera). Estos productores al advertir que su problema era compartido por un gran número de usuarios de la banca y que tenía su origen en la política de liberalización económica emprendida por el gobierno federal, buscaron una solución colectiva a su problema. Ante la negativa del gobierno federal y de los banqueros de atender a sus demandas, los deudores abrieron diversos espacios de participación cívica y buscaron articularse entre sí a través de confederaciones nacionales de deudores. Asimismo, ampliaron sus vínculos con organizaciones internacionales, promovieron un debate amplio en foros locales y nacionales sobre la legitimidad del Estado y de sus políticas; por último, desarrollaron diversas acciones para involucrar a los medios de comunicación masiva nacionales e internacionales.

La política neoliberal en México

La adopción de este paradigma obedece, por una parte, a las iniciativas de empresas transnacionales y de élites económicas nacionales que se benefician con la apertura comercial y la desregulación económica. Estas iniciativas han sido apoyadas por los organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio y por los gobiernos de los países más industrializados. Por otra parte, la aplicación de este paradigma se debe también a la aceptación que ha tenido en las élites burocráticas de los gobiernos de los llamados países en “desarrollo”. Estas élites son responsables de diseñar la política estatal y para lograrlo recurren a ciertos paradigmas del desarrollo, que por una parte, les permiten elaborar y evaluar los planes y programas estatales (Grindle 1986); por otra, justificar las opciones tomadas, particularmente cuando éstas afectan los intereses de ciertos grupos sociales o cuando se conceden privilegios y concesiones a unos sectores en detrimento de otros (González 1994). En estas circunstancias, el paradigma proporciona a la élite los elementos discursivos para justificar un proyecto económico y para promover un futuro de bienestar para la nación.

El neoliberalismo como paradigma que guía la política estatal se adoptó en México a partir de la crisis económica de 1982, cuando se replanteó la política de substitución de importaciones y la intervención amplia del Estado en la economía y se siguieron las medidas del Fondo Monetario Internacional. En la administración del presidente de la Madrid (1982-88), pero sobre todo, en la del presidente Salinas (1988-94): la intervención del Estado en la economía disminuyó, se desreguló la actividad de amplios sectores económicos, se alentó la inversión privada nacional y extranjera, se apoyó al sector exportador y se promovió la integración comercial de México con otros países. Fruto de esta última medida fueron la firma del Acuerdo General sobre Aranceles en 1986 y los Tratados de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos en 1993 y con Chile en 1994.

Tres son los rasgos de la política neoliberal que permiten explicar el por qué surgieron organizaciones de deudores en prácticamente todos los estados de la república y por qué formaron confederaciones nacionales. En primer lugar, la política neoliberal se caracterizó por ser excluyente de todos aquellos actores económicos que carecían de los recursos de capital, de la tecnología, de la escala de producción, del conocimiento o de los vínculos comerciales para competir en una economía abierta con las empresas más modernas del mundo. Un gran número de empresas de pequeña y mediana escala perdieron su mercado, en aras de una “modernización” que les ofreció oportunidades muy limitadas para “tecnificarse” o “reconvertirse” y que orilló a sus propietarios a endeudarse excesivamente, a operar en el

sector informal, a quedar desempleados o a buscar empleo en los Estados Unidos (González 1993, Rodríguez 1994, Chauvet 1994 y Girón 1994).

A partir de 1990 creció aceleradamente el número de deudores de la banca con carteras vencidas. Con ellos también creció la descapitalización y la falta de confiabilidad a nivel internacional en estas instituciones financieras mexicanas. En 1990 la cartera vencida comprendió el 2.1 por ciento del total de los créditos otorgados; en 1992 un 5.3 por ciento y en 1994 un 10.6 por ciento. Estas cifras de la Comisión Nacional Bancaria, no obstante presentan una situación crítica del sector financiero mexicano, subestiman el porcentaje real de deudores con cartera vencida (Calva 1994 y Girón 1994). En el primer trienio del presente año, más de la mitad de los bancos tenían problemas de capitalización, debido al monto de su cartera vencida; seis de los 18 grupos financieros tuvieron que recurrir al financiamiento del estado por una cantidad, que en promedio representó el 71 por ciento de su capital contable (La Jornada, 07/04/95)

El gobierno y los banqueros, preocupados por la fuerza que cobraron las manifestaciones públicas y las movilizaciones de los deudores con carteras vencidas, crearon diversos procedimientos para que los deudores con menores problemas financieros sanearan sus carteras y obtuvieran nuevos créditos. Esta medida, sin embargo, tuvo efectos limitados. Los productores que recibieron facilidades para reestructurar sus adeudos o recibieron subsidios estatales volvieron a tener problemas de endeudamiento excesivo, debido a la descapitalización que habían tenido sus empresas y sobre todo, a los siguientes factores: la imposibilidad de operar con utilidades en un mercado nacional abierto a las importaciones de productos baratos del extranjero, a una sobrevaluación de la moneda y a una contracción de la demanda nacional de bienes y servicios originada por la disminución del poder adquisitivo de los sectores medios y bajos (Carton 1993, González 1993 y Girón 1994).

En segundo lugar, la política neoliberal se caracterizó por ser marcadamente diferenciadora, al otorgar apoyos y privilegios a aquellas empresas y grupos financieros que tenían mayores oportunidades de responder a los retos de la apertura comercial y la desregulación económica. Se modificaron los marcos jurídicos para facilitar y favorecer la inversión privada de capital nacional y extranjero en prácticamente todos los campos de la economía; se vendieron un gran número de empresas del sector público y se privatizó el sector financiero. Este último fue otorgado en concesión a los grupos financieros nacionales con mayor fuerza económica. A los nuevos dueños, el Estado les concedió un trato privilegiado con respecto a otros sectores de la economía, al retrasar y regular la entrada de la banca extranjera; asimismo, les concedió impunidad para realizar operaciones al margen de las disposi-

ciones jurídicas que norman la actividad del sector financiero nacional (Fentanes 1995). Estas acciones permitieron a los nuevos dueños de la banca hacer de ella un lucrativo negocio con utilidades mayores a las que generan las bancas de países como Estados Unidos y Canadá (Girón 1994 y Vidal 1994).

El presidente Salinas en su Quinto Informe de Gobierno abiertamente justificó estos privilegios cuando expresó: “sin duda, la estabilidad económica, la desregulación y las privatizaciones han permitido la formación de grandes grupos financieros y empresariales” y agregó, que sin éstos “difícilmente podríamos acometer los retos de la globalización y la competitividad, y quedaríamos fuera de los mercados mundiales”.

En tercer lugar, la política neoliberal se caracterizó por centralizar las decisiones en el gobierno federal -sin mayor participación de los gobiernos de los estados y de los municipios- y por ser marcadamente autoritaria. Si bien estas características han sido una cualidad persistente en la práctica política del estado mexicano (Reina 1977, Meyer 1977), en la última administración se acentuó. En 1987 una camarilla de jóvenes funcionarios del sector financiero, sin mayor experiencia en puestos de elección popular y con una gran afinidad ideológica ocupó los puestos de mayor jerarquía política y económica del país como fueron: la presidencia de la república, las secretarías de estado que regulan la actividad económica y la presidencia del partido del estado (Partido Revolucionario Institucional) (Hernández 1994). Esta élite de funcionarios, liderada por el presidente Carlos Salinas instauró más ampliamente los principios del programa neoliberal.

El presidente, por su parte, gobernó de una manera pragmática y personal, debilitando las instituciones que daban soporte al estado y los ordenamientos formales que cumplían el papel de regular la convivencia y mediar en la resolución de los conflictos (ibid.). Esta situación nos explica que las manifestaciones contrarias a la política económica del estado se dirigieran al poder federal y especialmente al presidente, sin tomaran en cuenta a los gobiernos estatales ni municipales. Las acciones que emprendieron los deudores terminaron por ignorar las organizaciones corporativas de empresarios, trabajadores y de productores rurales vinculadas en mayor o menor medida al partido político gobernante.

En este volumen, dos artículos dan cuenta del impacto que ha tenido la política liberal en la cultura política y en las identidades locales. Capello, con base en una encuesta nacional, concluye que la aplicación de las políticas neoliberales implicó que una buena parte de los mexicanos perdiera la confianza en la validez de las instituciones públicas, a partir de las que se realiza la participación ciudadana, tales como los partidos políticos y las

sindicatos. Asimismo, encontró un consenso en cuanto valoran negativamente el desempeño de las instituciones de la administración pública que definen el rumbo nacional (las Secretarías de: Programación y Presupuestos, Hacienda, Agricultura y Recursos Hidráulicos, etcétera); por último, también se valoraba negativamente las instituciones que imparten justicia en México.

Pérez Prado, en este volumen, y Aitken (1995), también advierten que la ideología y la política económica del estado neoliberal debilitaron el papel de instituciones como los ejidos y los sindicatos, que tuvieron una importancia crucial en la vida económica y política local y sirvieron de base en la construcción de las identidades colectivas locales.

Sintetizando, las políticas neoliberales planteadas como solución a los viejos problemas nacionales han creado un amplio consenso de inconformidad a nivel nacional. El movimiento de los deudores de la banca, que inicialmente planteó demandas puramente reivindicativas relacionadas con su problema con la banca, pronto demandó cambios profundos en la política económica estatal e instauró nuevas formas de participación ciudadana, en asuntos que comprometían el futuro de la nación. Veamos más en detalle esta contrapropuesta a la política neoliberal.

Los deudores de la banca y la globalización

Las primeras movilizaciones públicas de los deudores de la banca en contra de la política económica del estado se presentaron aisladamente en los estados de Chihuahua en 1992 y en Jalisco en 1993. Los manifestantes fueron en su mayor parte productores agropecuarios de diferentes giros productivos y escalas de producción que pertenecían a organizaciones corporativas de productores agropecuarios, la mayor parte ligadas al partido gobernante. Entre ellos existían viejas rivalidades políticas en torno a la tenencia de la tierra (“ejidatarios” y “pequeños propietarios”); sin embargo, todos tenían deudas asfixiantes con la banca privatizada, carecían de crédito para seguir trabajando y, por último, varios tenían ordenes pendientes de embargo de sus propiedades en los tribunales locales.

Antes de realizar estas movilizaciones públicas, los deudores recurrieron a los gobiernos municipales y estatales, a los dirigentes estatales y nacionales de sus organizaciones gremiales e hicieron uso de sus redes de influencia política para convencer a políticos de alto rango en el gobierno federal de que éste debía de crear programas de apoyo y de capitalización en la región

a la que pertenecían los productores. Las demandas que plantearon los deudores y que posteriormente mantuvieron en sus marchas y movilizaciones fueron: apoyo financiero del gobierno federal para reestructurar los adeudos que tenían los productores con la banca privada; regulación de las importaciones de productos agropecuarios que afectaban a los productores nacionales; un alto a los embargos y remates de las propiedades de los deudores de la banca y un plan de apoyo para ellos; por último, un ajuste del valor del peso a su valor real, ya que al encontrarse sobrevaluado afectaba las exportaciones y favorecía las importaciones.¹ Estas demandas planteaban un viraje de la política de desregulación económica y de libre comercio del estado, por lo que no fueron escuchadas. Los gobiernos locales y los dirigentes de las corporaciones vinculadas al partido oficial se plegaron a los designios del gobierno federal y en algunos casos además obstaculizaron en las iniciativas de organización de los deudores.

En junio de 1993, los deudores de la costa de Jalisco se apoderaron del centro cívico de la ciudad regional, al estacionar maquinaria agrícola en las calles y en los accesos del zócalo. Este suceso aparentemente aislado tuvo un impacto principalmente en las regiones circunvecinas. Productores agropecuarios con carteras vencidas o con deudas asfixiantes en la banca se presentaron o enviaron mensajes para brindar su apoyo. Algo similar hicieron deudores de otras regiones de México. En agosto del mismo año, los productores costeños de Jalisco, junto con delegaciones de productores de sur del estado realizan una marcha a la capital del estado. Desobedecieron las órdenes del gobierno estatal y apostaron su maquinaria agrícola en las calles del zócalo. Este “plantón” duró 57 días y fue el detonador de otras manifestaciones públicas que se realizaron en Jalisco y en otros estados de la república (Rodríguez y Torres 1994, Rodríguez 1994, González 1995). Los ganaderos de los altos de Jalisco derramaron leche en lugares públicos como carreteras, fuentes de agua públicas y en las puertas de un edificio del gobierno local. Ante las críticas que despertó el desperdicio de este alimento optaron por regalarlo a vecinos de las colonias populares de la capital del estado. Los deudores de Chihuahua realizaron concentraciones en las ciudades regionales y en la capital del estado, cerraron temporalmente uno de los puentes internacionales en la ciudad fronteriza de Juárez y realizaron acciones conjuntas con organizaciones estadounidenses que se oponían a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (Carton 1994).

La prensa estatal y nacional registró acciones públicas tales como la obstrucción de carreteras y autopistas, huelgas de hambre de deudores apostados frente a sucursales bancarias o palacios municipales o estatales, irrupción de deudores en las radiodifusoras locales, desplegados periodísticos y

cartas en la sección de lectores, etcétera. Estas manifestaciones eran, por una parte, un recurso para formar y consolidar organizaciones locales de deudores que integraban indistintamente a individuos y organizaciones de diferentes estratos sociales y de distinta filiación política y religiosa. Por otra parte, estas manifestaciones eran acciones que en el ámbito local -municipio y región- desafiaban y enfrentaban al gobierno central y a los grandes consorcios económicos que adquirieron la banca al ser privatizada entre 1990 y 1991.

Ambos, gobierno central y banqueros, fueron identificados por los deudores -en este momento empresarios agrícolas de escala grande y pequeña- como aliados en la labor de imponer un proyecto de desarrollo contrario a sus intereses y al de sus trabajadores. Advertieron en que en realidad el llamado proyecto “modernizador” frustraba su participación como agentes económicos y los despojaba de la riqueza y de los medios de vida que consideraban un patrimonio de su familia. En la medida que se incrementó el número de deudores y de desempleados en el sector agropecuario y en sector industrial y de servicios vinculados a éste (maquinaria agrícola, insumos agropecuarios, laboratorios, etcétera) creció en todos la convicción de que el Estado defendía un interés contrario al de un gran número de mexicanos.

Los deudores de Jalisco, en la búsqueda por identificarse y realizar acciones conjuntas a nivel nacional, dieron nombre a su movimiento. Lo llamaron El Barzón. Este era el título de una canción popular, que describe la situación de un peón sumido en la miseria, que debía trabajar de sol a sol para abonar los intereses de su deuda al hacendado; un buen día, el peón, a instancias de su mujer, decide irse de revolucionario. Los integrantes de este movimiento social adoptaron el nombre de “barsonistas”.

Para los empresarios grandes resultaba extraño llamar al movimiento de deudores con el nombre de un corrido popular entre los grupos de campesinos que durante la Reforma Agraria demandaron la tierra a sus antepasados o a ellos mismos. Sin embargo, la iniciativa provino de los pequeños y medianos productores -varios de ellos beneficiados con la Reforma Agraria- que fueron los más activos y aguerridos en las movilizaciones públicas.

En octubre de 1993, los productores de Jalisco marcharon con su maquinaria a la capital de país, a donde también llegarían contingentes de deudores de otros estados de la república. La policía federal de caminos interrumpió la marcha y encarceló a los dirigentes. Al salir de la cárcel, unas semanas después, los dirigentes jaliscienses convocaron a una reunión de organizaciones de deudores agropecuarios y formaron una confederación nacional de asociaciones de deudores, con el propósito de realizar acciones conjun-

tas a nivel nacional y negociar directamente con los secretarios de estado y los principales accionistas de los bancos.

Ni el estado ni los banqueros aceptaron la propuestas de negociar las demandas de los deudores. Los banqueros, en particular, se negaron sistemáticamente a tratar con los dirigentes el problemas de carteras vencidas. A las reuniones entre deudores y funcionarios públicos solamente mandaron representantes sin capacidad de decisión. Su propuesta de que solo negociarían con cada deudor en particular, no ha sido cabalmente cumplida, ya que han otorgado en la práctica concesiones al conjunto de los deudores, al condonarles parte de los intereses moratorios, al ampliar los plazos de pago y al suspender temporalmente los embargos.

En el transcurso de 1994, la Confederación Nacional de Deudores de la Banca El Barzón que iniciaron los productores agropecuarios se convirtió en punto de confluencia de nuevas organizaciones de deudores de los sectores industrial y de servicios y de un gran número de consumidores urbanos con créditos hipotecarios y con tarjetas de crédito que no podían pagar. Al igual que con los agroproductores, no había antecedentes de una organización urbana que pudiera integrar a una población tan amplia y variada de deudores de la banca, dispersos por todo el país. Por tal razón, los deudores del sector industrial y urbano entraron en relación de manera individual o en grupo con las organizaciones locales de los agroproductores y dentro de ellas promovieron organizaciones que respondieran de manera más específica a sus problemáticas. Se crearon organizaciones en varias ciudades del país, como la Asociación de Usuarios de la Banca, el Frente para la Defensa del Patrimonio Familiar, Asociación de Deudores, Asociación Nacional de Tarjetahabientes. Todas ellas tenían su base y fuerza local. Muchas de ellas surgieron como iniciativa de organizaciones no gubernamentales civiles y religiosas que buscaron alternativas para solucionar un problema cada vez mas generalizado entre sus agremiados y entre la población urbana en general. En Tabasco y Aguascalientes, estas organizaciones surgieron con la iniciativa de dos o más deudores que convocaban a través de la prensa local o de las radiodifusoras locales a una reunión de deudores de la banca. En ellas se formó un grupo base que realizó acciones de apoyo y dio continuidad a la organización.

La devaluación de diciembre de 1994 reveló la fragilidad de la economía mexicana y desencadenó una aguda crisis económica. El alza en las tasas de interés y el desempleo, así como un estancamiento del aparato productivo explican que en los primeros nueve meses de 1995 la cartera vencida de la banca mexicana creciera al 112 por ciento, mientras la cartera bancaria aumentó en apenas un 11 por ciento (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, El Nacional, 04/12/95).

A fines de 1993, la Confederación de El Barzón se dividió en dos organizaciones nacionales que se disputaron la representatividad del movimiento nacional. Esta escisión, sin embargo, no ha restado mayor fuerza al movimiento por dos razones. En primer lugar, porque su fuerza y continuidad reside en las asociaciones locales, que en todo momento buscan ser incluyentes y presentar un frente amplio ante las autoridades públicas y banqueros. Estas asociaciones adoptan las consignas de la dirigencia, en la medida que les permiten alcanzar ventajas tangibles en los medios locales; si las movilizaciones en las capitales estatales tienen efecto local, acuden a ellas; si la estrategia de defensa jurídica en los tribunales da resultado, sencillamente se adopta; por último, si una Confederación ofrece mejores soluciones y mayor apoyo, sencillamente el grupo local se cambia a ella.

En segundo lugar, la rivalidad de las confederaciones nacionales no afectó seriamente al movimiento de deudores debido a que ellas mismas debían de presentar un frente único para conseguir apoyos y consensos de organizaciones políticas y civiles nacionales e internacionales. El caso más notorio fue la alianza que formaron “los barsonistas” para actuar conjuntamente con los diputados federales de los tres principales partidos de oposición. Para lograr semejante apoyo debieron formular una agenda política común. De esta manera, las confederaciones barsonistas fueron un factor de unidad entre partidos contendientes, que vieron en este movimiento “de masas” una oportunidad para aumentar sus clientelas políticas.

La característica de aglutinar asociaciones y organizaciones sociales del movimiento de deudores se demostró cuando en noviembre de 1995 se incorporó a sus filas un grupo de 500 “pequeños” y “medianos” accionistas de la banca. Estos se cambiaron de bando debido a que se convirtieron en deudores con carteras vencidas. Al privatizarse la banca estos accionistas compraron acciones y además obtuvieron créditos para incrementar el número de sus acciones de la banca, que entonces parecía ser un negocio muy rentable y seguro. Además, tuvieron facilidades para conseguir créditos que invirtieron en desarrollar y modernizar sus empresas. El alza en las tasas de interés y el estancamiento de la economía afectaron la capacidad de pago de estos deudores que habían gozado de privilegios para endeudarse y para manejar la banca al margen de las leyes y reglamentos jurídicos.² Al igual que los demás deudores, se resistieron a perder sus propiedades y de manera oportunista se acogieron a la suerte de un movimiento social que en sus principios no dudaron en reprobar. A pesar de su reticencia por identificarse y ser identificados con un movimiento de origen rural, con una amplia base popular, participaron en las reuniones que promovía una de las confederaciones nacionales y abiertamente se declararon “barsonistas”. Con esta acción pretendían frenar los embargos y remates de sus propiedades.

Los barsonistas acogieron entre sus filas a los accionistas de la banca, porque eran prueba fehaciente de que las políticas económicas habían fracasado; además, porque dejaban al descubierto los privilegios e irregularidades con las que se manejó la banca privatizada; por último, porque quedaba evidenciado que la organización corporativa de accionistas de la banca era a fin de cuentas controlada por los grandes consorcios financieros que no dudaron en sacrificar a sus socios.

Hoy día, la acción más importante que realiza este mosaico de organizaciones de deudores distribuidas en todo el territorio nacional y en la mayoría de las ramas económicas es la de presentar demandas en los tribunales locales, acusando a las instituciones de crédito de haber incurrido en prácticas prohibidas por la ley y a pedir la anulación de las operaciones de crédito. Estas demandas han saturado y nulificado los tribunales locales y han desenmascarado las prácticas deshonestas que emplearon los bancos desde antes de ser nacionalizados para incrementar los adeudos de sus clientes a niveles que no podían pagar. Los deudores acuden a los juzgados ya no como demandados, sino como demandantes. Con esta acción, las organizaciones de deudores han puesto en tela de juicio la legitimidad del estado como institución que garantiza el estado de derecho y el interés nacional.

La corrupción del sistema judicial hasta ahora ha favorecido a los banqueros y ha frenado las demandas interpuestas por los deudores. Frente a esta situación, los deudores han pasado a la denuncia pública de las corruptelas y han ideado diversas acciones para obstaculizar las funciones del poder judicial. Entre ellas se encuentra la sátira de los jueces locales y magistrados, los actos públicos en los que se insulta y rapa a los jueces imparciales y corruptos; la movilización de contingentes de deudores que bañan de miel y de plumas a los abogados de los bancos. En algunas áreas rurales que visité existen terrenos agrícolas embargadas por los bancos que han seguido siendo cultivados por sus propietarios, sin que los funcionarios bancarios locales se atrevan a impedirlo. Además, se ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia para demandar a jueces y magistrados corruptos y se ha publicado una lista con sus nombres.

Caracterización de un movimiento social en un régimen neoliberal

El movimiento social de deudores de la banca podemos caracterizarlo como:

- a) Un movimiento de actores con una conciencia global. Los que participan en este movimiento ubican su lucha dentro de un mundo interconectado e interdependiente, donde está en juego su futuro. Advierten claramente en su realidad inmediata, los efectos de las

medidas de la apertura comercial y de desregulación económica y frente a ellas toman una posición muy definida.

- b) Un movimiento de actores que se proyecta en un escenario global. La conciencia de vivir en un mundo interconectado e interdependiente los lleva a realizar acciones que les permiten incidir en este mundo. Con este fin construyen de manera similar a otras organizaciones de América Latina y del mundo (Mato 1994) redes de relaciones transnacionales con organizaciones afines o favorables a sus intereses; además, entran en relación con “agencias internacionales” (ibid) en este caso de derechos humanos, las cuales proyectan sus acciones en una escala global. Al igual que el estado, conceden un lugar especialmente privilegiado a los medios de comunicación nacional e internacional frente a los que desarrollan estrategias ingeniosas. Para los deudores que un buen día se presentaron semidesnudos en una sucursal bancaria de la ciudad de México, con pancartas y mantas en las que denunciaban su difícil situación, no fue noticia extraña saber que su foto circularía en diarios internacionales. Igualmente, tampoco extrañó que la acción de pelar a jueces tendría resonancia nacional e internacional.
- c) Un movimiento que disputa al estado la representación del interés nacional. El papel del estado en el actual contexto de globalización es cuestionada. El movimiento de deudores le reprocha al estado su falta de compromiso con el interés de la mayoría nacional, que hoy vive una crisis económica sin precedentes y ve amenazados sus medios de vida y sus riquezas. Por otra, le imputa el no haber hecho valer un estado de derecho, al permitir la impunidad y los privilegios de que gozaron las corporaciones financieras nacionales. El movimiento de los deudores se legitima como un movimiento que defiende el interés nacional y se propone dar validez al derecho, frente a la corrupción de jueces y magistrados.
- d) Un movimiento que redefine lo global a partir de la acción local. En este sentido sigue un camino con una dirección opuesta al que han seguido el estados y las corporaciones e instituciones transnacionales. Los deudores han tenido como referencia lo local para incidir en el proceso de cambio internacional. Este movimiento surgió a partir de una red de relaciones y de concertaciones locales. Se ha mantenido y se nutre de manifestaciones locales y a partir de ellas proyecta sus acciones en los escenarios nacional e internacional. Los deudores no formaron un movimiento que se opone a que el país cambie y responda a los retos de la globalización. Ellos objetan, más bien, el hecho de ver canceladas las oportunidades de ser protagonistas en un

proceso de cambio y a dejar un futuro incierto a la generación venidera. La afirmación de su presencia en este proceso de globalización se proyecta y se mantiene firme en el escenario local.

- e) Un movimiento incluyente. Frente a la política excluyente y autoritaria del estado la fuerza del movimiento de los deudores se encontraba en ser precisamente incluyente y en buscar un apoyo ciudadano amplio. No tienen una afiliación obligatoria, ni jerárquicas de autoridad claramente definidas en sus organizaciones regionales y nacionales. Los barsonistas han formado una red de organizaciones amplia, que opera fundamentalmente a través mediaciones y de consenso.
- f) Un movimiento social plural. En él se integraron individuos y grupos del campo y de la ciudad, de diferentes giros económicos, estratos sociales, grupos étnicos y religiosos partidos políticos. Todos ellos formaron un actor colectivo plural, donde se respetaron o toleraron las diferencias y se brindó la oportunidad para que cada cual, en su estilo y desde el lugar en el que se encontraba, contribuyera a resolver una problemática común. Esta amalgama social se acrecentó a medida que el número de deudores de la banca se incrementó -la crisis hizo lo suyo- y el gobierno central se mantuvo inamovible en su postura de no dar marcha atrás en sus políticas. Para afirmar la unidad, en medio de tales diferencias se crearon símbolos comunes, como la canción popular de El Barzón que sirve de nombre y de himno al movimiento; también, el logotipo de un tractor que hoy día portan de manera discreta los dirigentes de la asociación de accionistas deudores de la banca. Para crear esta simbología se ha recurrido a las manifestaciones de la tradición popular, sin que por el momento, se hayan adoptado símbolos "nacionales" -como la bandera o los héroes revolucionarios- que dan fundamento y legitimación al estado
- g) Un movimiento convergente. Los barsonistas constituyeron un actor colectivo, a medida que definieron un propósito y un interés colectivo. Calificar a este actor de convergente significa que es resultado de una construcción social (Alonso 1990) y no de circunstancias fortuitas, ni de fuerzas sociales "objetivas" que los llevaron a actuar de cierta manera. Los encuentros y discusiones -esenciales en la formación de El Barzón- les permitieron definir objetivos aglutinantes y medios para alcanzarlos. Las acciones dieron concreción a este actor colectivo y crearon experiencias de acción colectiva convergente entre sus agremiados que les dieron continuidad y fuerza. Las rivalidades, las divergencias e incluso las escisiones entre los barsonistas no

desaparecieron, ni dejaron de influir en el movimiento; sin embargo, han sido obviadas o toleradas por los barsonistas en razón de un objetivo y de un interés compartido, que los llevó a formar una coalición frente a la alianza que formaron el estado y los banqueros. Los movimientos convergentes, por esta razón, constituyeron una “síntesis políticas” (ibíd).

- h) Un movimiento político apartidista. Los deudores se han mantenido como un movimiento ciudadano que busca una solución colectiva a un problema originado por la política económica del estado y por los privilegios e impunidad que otorgó a las corporaciones financieras nacionales. Su lucha los ha llevado a buscar un amplio consenso y apoyo ciudadano debido al papel subordinado de los gobiernos municipales y estatales, al debilitamiento e inoperancia de las organizaciones corporativas y de las redes de patronazgo e influencia, que permitieron al Estado arbitrar y resolver conflictos sociales y satisfacer parcialmente las demandas de la población. Este movimiento ciudadano busca afanosamente un cambio político y se ha dado a la tarea de hacerlo realidad a través de una acción concertada desde el nivel local. Su carácter incluyente, plural y convergente lo ha llevado a permanecer al margen de las luchas partidarias. Antes bien ha sido un factor de convergencia de los partidos políticos de oposición. La dirigencia de estos últimos ha desarrollado acciones conjuntas con las organizaciones de deudores a nivel local y nacional, después de reconocer el impacto local que han tenido en los triunfos electorales que se han apuntado en los últimos tres años en los municipios y estados que ahora gobiernan.

Consideraciones finales:

El movimiento de deudores nos permite identificar nuevas formas de convivencia en el proceso de globalización, donde la heterogeneidad social y cultural no desaparece, ni es obstáculo en la constitución de organizaciones con un amplio apoyo social. La pluralidad (Mato 1993), parece ser un rasgo fundamental de los movimientos sociales que surgen en esta nueva era de globalización. La pluralidad, sin embargo, más que un rasgo de una estructura social que cobra vigencia a nivel mundial, es un propósito colectivo de individuos y de grupos coaligados, que definen objetivos e intereses comunes y realizan acciones para tratar de alcanzarlos. A este proceso de construcción social, de acuerdo con el trabajo de Alonso (1991), le he llamado convergencia.

El Barzón no obstante no incluye de manera importante a los sectores más marginados -los olvidados por la banca oficial y privada-, se ha convertido en el movimiento más integrador y plural de la historia contemporánea de México. No encontramos otro movimiento social de iguales dimensiones y extensión geográfica, en el que se hayan coaligado individuos y grupos social y culturalmente tan heterogéneos.

El hecho de que en este movimiento responda a un objetivo coyuntural y no cuente con una ideología política definida, ni haya formulado discursivamente un proyecto nacional, no debe impedirnos reconocerle su trascendencia y sus aportes a la formación una sociedad plural y democrática en México. En primer lugar ha realizado un diagnóstico y una crítica sobre la situación económica y política del país en el actual contexto de globalización. Ha criticado ampliamente en foros locales, regionales y nacionales las implicaciones del proyecto autoritario del estado y su falta de compromiso con el interés de las grandes mayorías nacionales. Esta tarea es condición necesaria para cualquier acción colectiva de gran envergadura que busque incidir en el cambio económico y político en México.

En segundo lugar, el movimiento del Barzón ha hecho caer en la cuenta y ha definido alternativas sobre qué rumbo debe seguir la nación y cuál debe ser el papel del estado nacional en esta tarea. En esta propuesta ha sido formulada de manera incluyente, sobreponiéndose a las diferencias y divergencias. Estas no le han impedido identificar intereses y objetivos nacionales y trabajar colectivamente en alcanzarlos.

En tercer lugar, el movimiento del Barzón, ha creado nuevos vínculos y experiencias de acción colectiva sobre base consensuales. De esta manera, el Barzón ha potencializado un proyecto convergente a nivel nacional, que es el deformar una nación plural y democrática, donde el estado defienda los intereses nacionales frente a los extranjeros y los intereses de las grandes mayorías frente a las corporaciones nacionales y extranjeras, que se beneficiaron como nunca con las reformas neoliberales.

Notas

1. El presidente de la república reconoció públicamente este hecho cuando justificó la devaluación de diciembre de 1994.
2. Un miembro activo de la asociación de accionistas deudores de la banca, que me pidió no ser identificado, me comentó que los adeudos más considerables de la banca pertenecen a los accionistas mismos; particularmente, a los accionistas más grandes.

Bibliografía

- Aitken, R. (1995) "Privatización, Autonomía y Género: Aspectos de Internacionalización e Identidad en ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán" en H. González y J. Arroyo (eds.) *Globalización y Regionalización. El Occidente de México*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Alonso, J. (1990) "Apuntes sobre la convergencia", Seminario Interno de CIESAS Occidente. mecanuscrito.
- Appadurai, A. (1990) "Disjuncture and difference in the global cultural economy". *Theory, Culture and Society*, Vol. 7, pp. 295-310.
- Calva, J.L. (1994) "La reforma neoliberal del régimen agrario mexicano: implicaciones en el largo plazo", en E. Ochoa y D. Loren (comp). *Estado y Agricultura en México. Antecedentes e Implicaciones de las Reformas Salinistas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Cartón de G., H. (1994) "La organización gremial de los agricultores frente a los procesos de globalización" Ponencia presentada en "México al Medio Día" Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas en Austin, Austin, Texas.
- Chauvet, M. (1994) "El desafío de la modernización ganadera en México: del rancho familiar a la empresa ganadera", en E. Ochoa y D. Loren (comp). *Estado y Agricultura en México. Antecedentes e implicaciones de las reformas salinistas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Child, J. (1992) "Apertura y Privatización" en L. Botero et al (eds.) *Neoliberalismo y Subdesarrollo. Un análisis Crítico de la apertura Económica*. Colombia: El Ancora Editores.
- Fentanes, C. (1995) *Los actos ilícitos de la banca y los jueces. Aspectos jurídicos del capitalismo salvaje mexicano*. Ediciones del Autor, México, D. F.

- Flaño, N. (1987) "Neoliberalismo en Chile y sus Resultados" en *Neoliberalismo y Políticas Económicas Alternativas*. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios para el Desarrollo.
- García, A. (1992) (Neoliberalismo) El Nuevo Totalitarismo, Auge y Caída del Reaganismo. Bogotá, Colombia: Editorial Oveja Negra.
- Girón, A. (1994) "La banca comercial de México frente al TLC". *Comercio Exterior*, vol.44, no.12:1068-1074.
- González, H. (1993) "Liberalización económica y agricultura de exportación en la región costa de Jalisco". J. Arroyo y D. Loren *Impactos regionales de la apertura comercial. Perspectivas del tratado de libre comercio en Jalisco*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara y UCLA Program on Mexico.
- González, H. (1994) "Política Liberal y Corporativismo: Las Asociaciones de Empresarios Agrícolas" en E. Ochoa y D. Loren (ed.) *Estado y Agricultura en México. Antecedentes e Implicaciones de las Reformas Salinistas*. México: Universidad Metropolitana.
- González, H. (1995) El movimiento del 'Barzón': una contrapropuesta al neoliberalismo autoritario del Estado Mexicano. Ponencia presentada en el Simposio: Impactos Regionales de la Apertura Comercial en el Occidente de México. Universidad de Guadalajara y Universidad de California, Enero 15-16.
- González, H. (1995a) "Introducción: Globalización y Regionalización" en H. González y J. Arroyo (eds.) *Globalización y Regionalización. El Occidente de México*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Grindle, M.S. (1986) "The State and Agrarian Change", en *The State and the Countryside: Development Policy and Agrarian Politics in Latin America*, pp. 11-24. Baltimore y Londres : The John Hopkins University Press.
- Hammer, J y O. Knudsen (1990) "Agricultural trade liberalization: developing country responses", en I. Goldin y O. Knudsen (editores) *Agricultural trade liberalization. Implications for developing countries*. Paris: The World Bank.
- Hannerz, U. (1992) "The Global Ecumene as a Network of Networks", en A. Kuper (de.) *Conceptualizing Society*. Londres: Routledge.
- Hernández, R. 1994 "Inestabilidad Política y Presidencialismo en México", *Mexican Studies* 10 (1): 187-216.
- Jácome, F. (1993) "Identidades Nacionales y Cooperación en la Región del Caribe" en D. Mato (Coord) *Teoría y Política de la Construcción de Identidades y Diferencias en América Latina y el Caribe*. Caracas, Venezuela: Unesco y Editorial Nueva Sociedad.
- Llach, J. (1987) "Neoliberalismo y Neoestructuralismo, en la Argentina 1976-1986" en *Neoliberalismo y Políticas Económicas Alternativas*. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios para el Desarrollo.

- Mato, D. (1993) "Procesos de Construcción de Identidades Transnacionales en América Latina en Tiempos de Globalización" en D. Mato (Coord.) *Teoría y Política de la Construcción de Identidades y Diferencias en América Latina y el Caribe*. Caracas, Venezuela: Unesco y Editorial Nueva Sociedad.
- Mato, D. (1994) "Complexities of Transnationalism: The Politics of Identities in "Latin" America in the Age of Globalization". Wenner-Gren International Symposium: Transnationalism, Nation-State Building, and Culture. Mijas, España.
- Meller, P. (1989) "América Latina y Condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial", en Instituto de Investigaciones Económicas (de.) *Neoliberalismo y Neoestructuralismo en América Latina*. Quito: Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
- Meyer, L. (1977) "Historical roots of the authoritarian state in Mexico". En J. Reina y R. Winert (eds) *Authoritarianism in Mexico*. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
- Modiana, E. (1989) "Cruzado Nuevo Conflictos Antiguos: El Programa Brasileño de Estabilización del 12 de Junio de 1987", en Instituto de Investigaciones Económicas (de.) *Neoliberalismo y Neoestructuralismo en América Latina*. Quito: Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
- Reyna, J. (1977) "Redefining the authoritarian regimen". En J. Reina y R. Winert (eds) *Authoritarianism in Mexico*. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
- Roberston (1992) *Globalization. social theory and global culture*. London: Sage Publictions Ltd.
- Rodríguez G., M.G. y G. Torres (1994) "El Barzón y COMAGRO: la resistencia de los agroproductores a la política neoliberal". *Espiral*, no.1, vol.1
- Rodríguez G., M.G. (1994) "Establos de resistencia, semilleros de cambio: ganaderos de leche y tecnócratas en el quehacer cotidiano de la globalización". Ponencia presentada en el coloquio: Las disputas por el México rural. Zamora, Mich: El Colegio de Michoacán.
- Sarmiento, E. (1992) "Evaluación y Perspectiva de la Apertura" en L. Botero et al (eds.) *Neoliberalismo y Subdesarrollo. Un análisis crítico de la apertura económica*. Colombia: El Ancora Editores.
- Velasco, A. (1989) "Monetarismo y Neoliberalismo: Lecciones Macroeconómicas", en Instituto de Investigaciones Económicas (de.) *Neoliberalismo y Neoestructuralismo en América Latina*. Quito: Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
- Velázquez, Z. E. y A. García (1994) "El Barzón o los vientos que vinieron del norte" *El Cotidiano*, No.61: 82-88.
- Vidal, G. (1994) "Reforma Económica, mecanismos de financiamiento y procesos de inversión". *Comercio Exterior*, vol.44, no.12:1083-1092.